



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D. C., trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

RADICADO: 11001-33-35-026-2019-00122-00
PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
ACCIONANTE: CLEMENCIA GIRALDO LLANO
ACCIONADO: NACIÓN- RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

En el presente asunto, **CLEMENCIA GIRALDO LLANO** promueve demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la **NACIÓN- RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, con la finalidad de obtener la nulidad del Decreto No. 314 del 6 de julio de 2018, por medio del cual, se declara la insubsistencia tácita de la demandante.

Conforme a lo anterior, y revisado el expediente, este despacho observa que no es posible avocar conocimiento de la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

En primer lugar, se debe decir que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala la oportunidad en la cual se deben presentar las demandas, refiriéndose en el numeral 2º, literal d), específicamente a las de nulidad y restablecimiento del derecho, preceptuando lo siguiente:

“ART. 164.- Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(...)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.”

Visto esto, al analizar los términos en los cuales se instauró la presente demanda, se observa lo siguiente:

- Mediante Decreto 314 del 6 de julio de 2018, el Presidente del H. Consejo de Estado, nombró en propiedad al señor Nelson Javier Ángel Pérez, en el cargo de Auxiliar Judicial Grado 4, en reemplazo de la señora Clemencia Giraldo Llano, quien ocupaba el mismo cargo en provisionalidad.(fl. 24)
- Tal decisión fue notificada a la actora mediante oficio No. 024 del 30 de agosto de 2018, el día 31 del mismo mes y año. (fl. 23)

De acuerdo con lo antes manifestado, se tiene que el Decreto 314 del 6 de julio de 2018, concluyó una actuación administrativa, al nombrar en **propiedad** al señor Nelson Javier Ángel Pérez en reemplazo de la señora Clemencia Giraldo Llano, quien ocupaba el cargo de **Auxiliar Judicial Grado 4 en provisionalidad**, con ocasión al registro de elegibles vigente para la época de la ocurrencia de los hechos y, comunicándole el acto administrativo a la actora el día 31 de agosto de 2018, a través del oficio No. 024 del 30 de agosto de la misma anualidad, quedando así agotado el trámite ante la entidad, pues contra la misma no procedía recurso alguno, lo cual permitía que se pudiera acudir directamente ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a controvertir la legalidad del acto administrativo a través del medio de control respectivo.

En este orden de ideas, se tiene, que a la señora Clemencia Giraldo Llano le fue comunicado el Decreto 314 del 6 de julio de 2018, el día 31 del mismo mes y mismo año.

Que contando a partir del día hábil siguiente a la notificación del acto acusado, es decir, el 1º de septiembre de 2018, la accionante contaba con 4 meses para interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, feneciendo tal término el 1º de enero de 2019.

Ahora, la solicitud de conciliación fue presentada el 14 de enero de 2019 (fl.26), y la realización de la misma fue el 18 de marzo del hogaño, es decir, dicho procedimiento se surtió a pesar de haberse configurado el fenómeno jurídico de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; hecho que no fue valorado por la señora Procuradora Delegada omitiendo, el análisis exigido por el ordenamiento jurídico en el Decreto 1065 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único del Sector Justicia y del Derecho, el cual consagra que no puede adelantarse el procedimiento de conciliación extra judicial en los siguientes eventos:

“Artículo 2.2.4.3.1.1.2. Modificado Art.1 Decreto 1167 de 2016 Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control

previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1. *No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo:*

** Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.*

** Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.*

*** Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.***

Negrillas del Despacho

No podía entonces la señora Procuradora 194 Judicial I para Asuntos Administrativos, adelantar el trámite conciliatorio, puesto que el medio de control se encontraba caducado; sin embargo no se hizo reparo alguno frente a esta situación y tampoco se adoptaron las medidas conducentes para conjurar la presentación de una demanda que como ya se ha expresado ha caducado.

De la misma manera, no es de recibo por parte de este Despacho Judicial, que el apoderado judicial de la parte actora manifieste en su libelo demandatorio, que el presente asunto no se encuentra afectado con el fenómeno jurídico de caducidad, señalando para el efecto, que dicho termino se debe contar a partir del 11 de septiembre de 2018, por lo que fenecía el 11 de enero de 2019, y la solicitud de conciliación se radicó ese mismo día. Pues, si se tiene en cuenta dicho planteamiento, igual se encontraría configurada la caducidad del medio de control, habida consideración que, la solicitud de conciliación fue radicada el 14 de enero de la presente anualidad y no, como lo afirma que Profesional del Derecho, que la misma fue solicitada el 11 del mismo mes y año, pues el acta suscrita por la Procuradora 194 para asuntos administrativos, es clara en señalar que “la señora **CLEMENCIA GIRALDO LLANO** presentó solicitud de Conciliación extrajudicial el día **14 de enero de 2019**, convocando al **DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – RAMA JUDICIAL – CONSEJO DE ESTADO.**”¹

A su turno, debe aclarar el Despacho, que el Profesional del Derecho en el numeral 4º del acápite de “**HECHOS**”, afirma que el día 10 de julio de 2018², el Presidente del Consejo de Estado, le comunicó a la demandante, que mediante Decreto 314 de 2018, designó al señor Ángel Pérez, en el empleo que ella ocupaba en provisionalidad; por lo que sería innegable la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad del presente asunto, si se tiene en cuenta dicha fecha, pues el término para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, culminaba entonces el 11 de noviembre de 2018.

¹ Folio 26

² Folio 4

Ahora y en gracia de discusión, debe señalar el Despacho que dentro del presente asunto, el trámite de conciliación extrajudicial se agotó frente al oficio 024 notificado el 31 de agosto de 2018, y no respecto al Decreto 314 del 6 de julio de 2018, por lo que no se estaría acreditando el requisito de que trata el artículo 161 numeral 1° de la Ley 1437 de 2011, y a su vez, se configuraría la causal señalada en el numeral 3° del artículo 169 de la norma *ibídem*³.

Lo anterior, teniendo en cuenta la sentencia emitida el 31 de octubre de 2013 por el H. Consejo de Estado⁴, que señaló:

**“OFICIO DE COMUNICACION DE RETIRO DEL SERVICIO POR
INSUBSISTENCIA TACITA – No es enjuiciable**

Respecto al oficio de 22 de marzo de 2002 cuya nulidad se pretende, advierte la Sala que el mismo se limita a informar al demandante la decisión contenida en el Decreto 0542 de 20 de marzo de 2002, por lo tanto, no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna, careciendo de contenido decisorio, motivo por el cual, no constituye un acto administrativo enjuiciable al tenor del artículo 85 del C.C.A y en tal sentido, la Sala procederá a declararse inhibida para pronunciarse respecto al mencionado oficio. En este orden, no es enjuiciable el medio que utiliza la Administración para informar sobre un acto administrativo por cuanto con él no crea ni modifica situación alguna dado que su función consiste en poner en conocimiento la decisión contenida en otro acto administrativo”.

Por lo tanto, al acreditarse el agotamiento del requisito de procedibilidad respecto del oficio No. 024 del 30 de agosto de 2018, que como se reitera, éste no es susceptible de control judicial, sería del caso también, el rechazo de la demanda al configurarse la causal descrita en el numeral 3° del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; habida consideración que, con dicho acto no se está creando ni modificación alguna situación jurídica, pues lo único que hace, es comunicarle a la actora sobre la fecha de posesión del señor Ángel Pérez, en el cargo que la misma ejercía en provisionalidad.

En este orden de ideas, queda plenamente demostrado que se ha configurado la caducidad del medio de control, y corolario de ello, es del caso rechazar la demanda, pues la misma se presentó por fuera de la oportunidad procesal que tenía la parte demandante para el efecto, y en este evento el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

³ “**Artículo 169. Rechazo de la demanda.** Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

(...)

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.”

⁴ H. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B” Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve – Demandante: Leonel Urrego Murillo – Demandado: Departamento de Antioquia. Expediente **05001-23-31-000-2002-03400-01(1388-12)**

dispone en su numeral 1º que se rechazará la demanda “*cuando hubiere operado la caducidad*”.

Corolario de todo lo expuesto, se deberá rechazar la presente demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad del medio de control, tal como quedará anotado en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

R E S U E L V E:

PRIMERO.- RECHAZAR POR CADUCIDAD la demanda interpuesta por la señora **CLEMENCIA GIRALDO LLANO**, en contra de la **NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, conforme lo manifestado en la parte motiva de este proveído.



SEGUNDO.- Remítase copia de la presente providencia a la señora Procuradora 194 Judicial I para asuntos administrativos de la Procuraduría General de la Nación.

TERCERO.- Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones a que haya lugar, devuélvanse a la parte demandante los anexos sin necesidad de desglose y a través de la Oficina de Apoyo procédase al archivo correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUIENTERO GNECCO
Juez

FV


JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 14 DE MAYO DE 2019 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)
 LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA

